



**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

**MEDIDA CAUTELAR - ACCIÓN DE LESIVIDAD
EXPEDIENTE: 2021 00280 00**

**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES VS
DAGOBERTO AVENDAÑO ZAMBRANO**

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** en contra del señor **DAGOBERTO AVENDAÑO ZAMBRANO** para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por el apoderado de la entidad accionante, previa referencia a los antecedentes y fundamentos de la medida:

I. ANTECEDENTES:

Medida Cautelar Solicitada: El apoderado de la parte actora sustentó la medida cautelar de carácter suspensivo contra el acto de reconocimiento pensional acusado en los siguientes términos:

“Solicito se declare la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resoluciones No. 027258 del 14 de septiembre de 2010 y No. 004486 del 16 de febrero de 2011 por medio de la cual el Instituto de seguro social ISS, hoy Administradora Colombiana de pensiones reconoció una pensión de vejez.”

Sostiene la entidad que inicialmente realizó la liquidación de la pensión del accionante mediante la Resolución No. 027258 del 14 de septiembre de 2010, teniendo en cuenta para ello 1464 semanas cotizadas, que arrojaron un monto pensional de \$1.804.471 para el año 2010. Pensión cuyo reconocimiento se suspendió al retiro definitivo del servicio.

Una vez acreditado el retiro del servicio, mediante la Resolución No. 004486 del 16 de febrero de 2011 se modificó el reconocimiento pensional con 1464 semanas

cotizadas y se ingresó a nómina con un monto pensional de \$1.861.673 para el año 2011.

Ahora bien, en el año 2021 al realizar un nuevo estudio de la reliquidación, teniendo en cuenta 1.469 semanas, la liquidación arrojó una disminución en el monto pensional que modifica de \$2.673.628 a \$2.612.278 el monto pensional, liquidación que tomó en cuenta como base los factores salariales de los últimos 10 años.

Trámite de la Medida Cautelar: De la medida cautelar se corrió traslado al accionante mediante auto del 10 de septiembre de 2021 por el término de cinco (5) días hábiles, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., para lo cual se le realizó la notificación personal en su correo electrónicos el día 28 de septiembre de 2021.

Oposición a la Medida: Mediante oficio radicado de manera electrónica el 30 de septiembre de 2021, el apoderado judicial de la parte accionada se opuso a la prosperidad de la medida cautelar. Indicó que el accionado cumplió con todos los requisitos para ser beneficiario de una pensión en los términos del Decreto 758 de 1990 que fueron reconocidos a través de las Resoluciones No. 027258 del 14 de septiembre de 2010 y No. 004486 del 16 de febrero de 2011.

Sostiene que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 se estableció una prohibición de reducir el valor de las mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho, fue enfática en sostener que la entidad accionante abusa del medio de control con fundamento en una diferencia arrojada por el cambio del sistema de liquidación que actualmente usa la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que difiere de la utilizada en su momento por el extinto ISS. Posición que viola los principios *Non Reformatio In peius* y de Favorabilidad en materia laboral.

Agrega que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, defrauda la confianza legítima de sus afiliados quienes acuden a ella solicitando reliquidaciones y sufren represalias de este tipo por el solo hecho de solicitar una revisión del monto de sus mesadas.

Ahora bien, indica que la solicitud de medida cautelar incumple con sus requisitos formales, no realiza un análisis que permita concluir que el acto contraria normas constitucionales y tampoco señala como la medida evita un perjuicio irremediable que no pueda ser conculcado adelantando las etapas procesales

correspondientes. En estos términos solicita que se niegue la medida cautelar y se adelante un debido juicio que garantice el debido proceso.

Para resolver se **CONSIDERA:**

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo pueden ser de carácter; preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A., la cual se refieren a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados y el respectivo restablecimiento del derecho. Sin embargo, para la adopción de dichas medidas se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, la cual establece:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)

Planteado lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A. contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, condicionada a que el acto acusado contraría de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, puesto que de requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte la sentencia.¹

Así, uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contenciosa administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Referencia: expediente 3069, donde se especifica:

¹ Consejo de Estado, Auto 21845 .7/2002 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez

“(…)Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(…)”²

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de carácter suspensivo de los efectos del acto administrativo contenido en la Resoluciones No. 027258 del 14 de septiembre de 2010 y No. 004486 del 16 de febrero de 2011 que reconocieron y reliquidaron la pensión de vejez del accionante que se encontraba suspendida a la acreditación de su retiro definitivo.

El apoderado de la entidad actora sostiene que entre el lapso del reconocimiento de la pensión mediante las Resoluciones No. 027258 del 14 de septiembre de 2010 y No. 004486 del 16 de febrero de 2011 que tuvieron en cuenta únicamente 1.464 semanas cotizadas y que posteriormente se efectuaron más cotizaciones que no se tuvieron en cuenta en la última liquidación. Cotizaciones que ascendieron a 1469 semanas, cuyos montos al ser tomados durante los últimos 10 años alteraron de forma negativa el monto pensional del accionante.

Pese a lo indicado por el apoderado judicial de la entidad, este Despacho Judicial encuentra que la disminución en IBL no obedeció a actuaciones en las que tuviera incidencia el accionante sino a las meras modificaciones de semanas entre la obtención del derecho pensional y el retiro definitivo del servicio. De igual forma, al ponderar la situación este Despacho Judicial considera que no se debe suspender una pensión sin tener la certeza absoluta de la nulidad de los actos administrativos que originaron el derecho. Debe agregarse que no existe discusión frente al derecho pensional sino al monto real del IBL, cuya desviación altera el monto pensional de \$2.673.628 a \$2.612.278 para el 2021, valor que resulta ser ínfimo por lo que se exige a este Despacho Judicial tener certeza absoluta de la situación para decretar la medida cautelar solicitada y suspender los efectos totales de la pensión.

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), Exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

Igualmente, ha de recordarse que el decreto de la Medida cautelar debe obedecer, entre otros, a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que este Despacho Judicial considera que es irracional y desproporcionado decretar la medida cautelar en los términos solicitados por la entidad cuando existe una desviación tan baja en la mesada pensional y no existe discusión del derecho pensional en sí mismo. En otras palabras, la formulación de la medida cautelar es desproporcional y no justifica las razones por las cuales los valores pagados de más no podrían llegar a ser recuperados al finalizar el proceso luego de agotar en debida forma las etapas probatorias.

Por lo que se debe reiterar que el decreto de la medidas cautelares exige también el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 y los literales a y b del numeral 4 del artículo 231 del C.P.A.C.A que establece:

ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.

(...)

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
- b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.*

En este sentido, la entidad no indicó como el no otorgamiento de la medida cautelar causaba un perjuicio irremediable para la entidad, como el no reconocimiento de la medida cautelar podría tornar nugatorios sus derechos y tampoco realizó un juicio mínimo de ponderación entre el interés público y la medida cautelar, por lo que ha de negarse la misma.

Finalmente se insiste en que la diferencia no genera un perjuicio irremediable para la entidad, la continuación en su pago no torna nugatorio el fallo y no existe un criterio valido de ponderación entre la suspensión total de una pensión y el pago de más de una suma tan inferior, que en todo caso podría llegar a ser recuperada por la entidad sin poner en riesgo el mínimo vital del accionante que se garantiza con el ingreso mensual que representa una pensión de vejez que es menor a 3 S.M.M.L.V.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SE RECONOCE personería jurídica para actuar en calidad de apoderada de la parte accionada el Dr. **VÍCTOR HUGO ARCILLA VALENCIA** identificada con la CC. No. 16.070.869 y la T.P No. 148.902 del C.S.J., en los términos del poder allegado de manera electrónica con el lleno de requisitos del artículo 74 del C.G.P en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 del C.P.A.C.A en concordancia con lo establecido en los artículo 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 del 2020, a los correos, info@gestionjuridicagroup.com: victor.arcila@gestionjuridicagorunp.com : notificacionesjudiciales@Colpensiones.gov.co paniguacohenabogados@gmail.com, paniguabogota4@gmail.com y en los correos oficiales de las entidades.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

FCS

Firmado Por:

Rosse Maire Mesa Cepeda
Juez Circuito
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8aa1d351bdaca8777d6d43c633b17c45b5715a3d493abf85fbce6a6af261ebbf**

Documento generado en 29/10/2021 11:49:27 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>